



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 087 EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h12 de 10 de diciembre de 2021, conforme la convocatoria de 08 de diciembre de 2021 se lleva a cabo en la sala de sesiones No. 2 del Municipio de Quito, la sesión No. 087 - extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, presidida por el concejal Eduardo del Pozo.

Por disposición del señor presidente de la Comisión, se procede a constatar el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra conformado por los concejales: Eduardo del Pozo, Margoth Guevara, Carlos Jaramillo y Marco Collaguazo de conformidad con el siguiente detalle:

REGISTRO ASISTENCIA – INICIO SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Margoth Guevara	1	
Carlos Jaramillo	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos		1
TOTAL	4	1

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Daniela Alexandra Valarezo Valdivieso Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad, Paola Hortensia Cárdenas Valencia Administración General, Juan Guillermo Montenegro Ayora Director Metropolitano Tributario, Andrea del Rocío Ruiz Villacis y Fabian Mauricio Rodríguez Herrera de la Dirección Metropolitana Tributaria, Esteban Sebastián Borja Moya, Juan Calixto Toapanta Delgado y Adriano Abraham Molina Guzmán de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, Hernán Augusto Bedoya Vásquez, asesor del despacho del concejal Omar Cevallos, Mónica Elizabeth Amaquiña Masabanda de la Procuraduría Metropolitana, Jorge Alfredo Guzmán Pérez, asesor del despacho de la concejala Soledad Benítez, Jaime Ernesto Bucheli Albán Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, Ricardo Camacho y Kimberly Jiménez de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, Juan Carlos León, asesor del despacho del concejal Eduardo del Pozo, Karina Patricia Tello Toral asesora de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.

La abogada Hillary Herrera, delegada de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito ante la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, constata que existe el quórum legal y reglamentario y procede a dar lectura del orden del día:



1.- Conocimiento de las observaciones emitidas por el Concejo Metropolitano en el primer debate del proyecto de: ***“ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO IV DE LAS TASAS, CAPÍTULO VII DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTENIDO EN LA ORDENANZA NO. 001, DE 29 DE MARZO DE 2019”***; y, resolución al respecto.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto: Conocimiento de las observaciones emitidas por el Concejo Metropolitano en el primer debate del proyecto de: “ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO IV DE LAS TASAS, CAPÍTULO VII DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTENIDO EN LA ORDENANZA NO. 001, DE 29 DE MARZO DE 2019”; y, resolución al respecto.

El Abg. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, manifiesta que se ira realizando una revisión de todas las observaciones emitidas por los concejales

Esteban Sebastián Borja Moya de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad; expone el texto de ordenanza en base a todas las observaciones que se acogieron, por parte de los concejales Metropolitanos de Quito, dando a conocer las siguientes observaciones: respecto al hecho generador en el artículo 2, salario básico unificado del trabajador en general en el artículo 6, en base a la observación de las extensiones en el artículo 7 no se acoge porque sería contrario a la ley.

Siendo las 10h19 ingresa a la Sala de Sesiones, el concejal Omar Cevallos.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad) como Anexo 1).

Juan Calixto Toapanta Delgado de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad; expone el artículo 10 respecto al Sistema de Medición de la Tasa de Seguridad y convivencia ciudadana del DMQ.

El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión; manifiesta que conforme al artículo 10 no está contestado a lo solicitado por la Corte Constitucional en el número 3 de su parte resolutive ha establecido parámetros que se deben cumplir para la emisión de una nueva normativa, que son: *“(…) (iii) que se establezcan mecanismos de medición de satisfacción del servicio prestado (…)”*.



Daniela Alexandra Valarezo Valdivieso Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad; manifiesta que la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional y no es corresponsabilidad del Municipio del DMQ sino que el mismo trabaja como ente solidario para que se reduzca estos índices de inseguridad ciudadana y que para medir la satisfacción del servicio prestado se lo hará a través de entrevistas, encuestas, entre otras.

El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión; manifiesta que en base al artículo 10 del proyecto de ordenanza solo debería estar especificado los servicios que presta el Municipio del DMQ, observación que es acogida quedado de la siguiente marea *“La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad en coordinación con EP EMSEGURIDAD, son los entes técnicos encargados para realizar el seguimiento y evaluación de satisfacción a los servicios efectivamente realizados por la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos, seguimiento de proyectos relacionados Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana vigente”*.

El concejal Carlos Jaramillo, miembro de la Comisión; solicita que en los considerandos se incluyan los artículos 566 y 568 del COOTAD, observación que es acogida por la Comisión.

El Abg. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, manifiesta que se acoja las observaciones remitidas por la vicealcaldesa Brith Vaca que son más de forma que de fondo: en el título que se cambie reformatoria por sustitutiva, el artículo 1 se cambie por artículo único, entre otras, observaciones que son acogidas por la Comisión.

Al concluir la revisión, el concejal Eduardo del Pozo, **mociona:** luego del análisis y de la revisión de la documentación del expediente, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación emitió DICTAMEN para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en segundo debate, el proyecto de ordenanza en referencia.

La Comisión aprueba la moción, conforme la siguiente votación:

REGISTRO DE VOTACIÓN					
INTEGRANTES COMISIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1				
Margoth Guevara	1				
Carlos Jaramillo	1				
Marco Collaguazo	1				
Omar Cevallos	1				
TOTAL	5	0	0	0	0



La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, **resolvió:** luego del análisis y de la revisión de la documentación del expediente, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación emitió DICTAMEN para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en segundo debate, el proyecto de ordenanza en referencia.

El presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 11h30.

REGISTRO ASISTENCIA – FINALIZACIÓN SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Margoth Guevara	1	
Carlos Jaramillo	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
TOTAL	5	0

Para constancia, firma el presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.

Concejal Eduardo del Pozo
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO, FINANZAS
Y TRIBUTACIÓN**

Abg. Pablo Santillán Paredes
**SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO**

REGISTRO ASISTENCIA – RESUMEN DE SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Margoth Guevara	1	
Carlos Jaramillo	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
TOTAL	5	0

Acción	Responsable	Unidad	Fecha:	Sumilla
Elaborado por:	Hillary Herrera	SCPF	2021-12-13	
Revisado por:	Samuel Byun	PSGC (S)	2021-12-13	

ANEXO 1



PROYECTO DE ORDENANZA

ORDENANZA REFORMATORIA AL TÍTULO IV DE LAS TASAS, CAPÍTULO VII DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTENIDO EN LA ORDENANZA NO. 001, DE 29 DE MARZO DE 2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad ciudadana es el resultado de una política que se orienta hacia una estrategia integral, la cual incluye **(i)** la mejora de la calidad de vida de la población; **(ii)** la acción comunitaria para la prevención del delito; **(iii)** una justicia accesible, ágil y eficaz; y **(iv)** una educación que se basa en valores, en el respeto de la ley y la tolerancia. El enfoque de seguridad referido parte de la noción de amenaza y de manera implícita de los conceptos de vulnerabilidad y desprotección. En esa línea, este concepto propuesto se aparta de aquellas concepciones que definen a la seguridad ciudadana en función de la criminalidad y el delito, ya que enuncia explícitamente la dualidad objetiva/subjetiva del concepto seguridad ciudadana.

De lo referido, el problema de la inseguridad se puede dar tanto en contextos con altos niveles de inseguridad registrada, así como en países donde los registros de inseguridad y criminalidad sean bajos, aunque la percepción de las mismas sea muy elevada. (PNUD 2011)

Así, la seguridad ciudadana se constituye en un derecho constitucional que permite el disfrute de otros derechos. Si bien, la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades, por citar algunos ejemplos, no constituyen violencia o inseguridad por sí mismos, son factores que propician amenazas directas a la seguridad y a la convivencia ciudadana en cualquier sociedad. (PNUD 2011)

Para (Carrillo 2018), *“...la seguridad ciudadana se ha convertido en un asunto prominente en la agenda de la consolidación democrática y el desarrollo de América Latina. **Impone elevados costes económicos y se introduce en la vida política. La seguridad, como bien público, es responsabilidad primaria del Estado, pero también compete a las autoridades locales y la sociedad civil. Una estrategia global frente a la violencia requiere del fortalecimiento del Estado de derecho, la reforma del sistema judicial y de la policía, de las prisiones, mayores esfuerzos en la prevención, y mayor participación de la sociedad civil...**”* Entonces, la concepción del desarrollo basada en la vigencia y cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y, en ese marco, la búsqueda de sociedades



más gobernables, no sólo implica redefinir el rol del Estado y de las políticas públicas; sino también, supone revisar las responsabilidades de la sociedad civil. Hoy parece que las demandas de la ciudadanía de más seguridad no sólo están insatisfechas, sino que el aumento de la percepción de inseguridad lleva al círculo vicioso de exigir cada vez más en este campo (Carrillo 2018).

La Corte Constitucional del Ecuador en las sentencias 15-14-IN/20 y 70-11-IN/21 ha indicado que si bien la competencia de la seguridad ciudadana le corresponde al gobierno central, no es posible concluir, sin más, que los gobiernos municipales están constitucionalmente prohibidos de intervenir en la seguridad interna, puesto que existen otras normas *“que hacen partícipes en forma colaborativa a los municipios de las políticas de seguridad ciudadana, así, por ejemplo, el artículo 54.n del COOTAD, que establece que son funciones del gobierno municipal crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, y el artículo 60.q del COOTAD, que atribuye al alcalde la formulación y ejecución, en forma coordinada, de las políticas locales sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”*.

En ese sentido, al tener los GADs municipales facultades en materia de seguridad ciudadana, se expidió la Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019, la cual contiene el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, y en su capítulo VII consta regulada la Tasa por los Servicios de Seguridad Ciudadana.

No obstante de lo referido, la Corte Constitucional en la sentencia No. 70-11-IN/21 declaró inconstitucional la tasa de seguridad con efectos diferidos; entre las razones se encuentran: **(i)** que la configuración del tributo no permite a esta Corte establecer que los valores cobrados por esta tasa guarden relación con el costo de producción de los servicios de seguridad ciudadana, por lo que no se verifica la observancia de los principios de provocación, recuperación de costos y equivalencia; **(ii)** que la configuración normativa del tributo no contiene los elementos esenciales de la tasa por servicios de seguridad ciudadana; y, **(iii)** que la configuración normativa del tributo no permite identificar claramente cual es el accionar estatal vinculado a la tasa de seguridad por servicios ciudadanos, en tal sentido, al no estar plenamente determinado el accionar estatal, tampoco se evidencia que el mismo cuente con un sistema de medición de satisfacción específico.

Es decir, la Corte Constitucional no cuestionó la existencia de la tasa de seguridad ciudadana. *A contrario sensu*, en el número 3 de su parte resolutive ha establecido parámetros que se deben cumplir para la emisión de una nueva normativa, que son: (i) que la tasa fijada por servicios de seguridad ciudadana establezca un accionar estatal determinado; (ii) que la tarifa que se establezca



por los servicios de seguridad ciudadana, responda a los costos en los que incurre el GAD para la prestación del servicio vinculado a la tasa, de tal forma que se respeten el principio de provocación y recuperación de costos y el principio de equivalencia; y, (iii) que se establezcan mecanismos de medición de satisfacción del servicio prestado.

Con esos antecedentes, se realizó un diagnóstico de la seguridad y convivencia ciudadana para conocer y entender las dimensiones de esta problemática local en la actualidad. Así mediante Informe de Seguridad Ciudadana “La Materialización de la Tasa de Seguridad en Servicios para el Distrito Metropolitano de Quito”, **enviado mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-3102-OF, de fecha 29 de noviembre de 2021**, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana evidencia la necesidad de contar con una tasa de seguridad para atender los requerimientos de la ciudad.

En el informe referido *ut supra*, se refleja la necesidad del Distrito Metropolitano de Quito de contribuir a minimizar la problemática que enfrenta la ciudad, en torno a la seguridad y convivencia ciudadana; puesto que, la victimización (víctima de algún tipo de robo) en el año 2019 se situó en el 47.88%, es decir, 5 de cada 10 quiteños fueron víctimas de algún tipo de robo. La impunidad en Quito, también configura un fenómeno muy importante, pues solamente el 25% de los delitos ocurridos son denunciados. La impunidad tiene como efectos colaterales, alta percepción de inseguridad, desconfianza en el sistema de justicia, baja credibilidad política y sobre todo la descomposición del tejido social.

La percepción de inseguridad en el DMQ, se ha convertido en un verdadero problema público, pues 9 de cada 10 quiteños perciben a la ciudad como insegura, y sin duda, el Municipio a través de sus entes relacionados debe configurar estrategias -planes, proyectos- para velar por la seguridad ciudadana de sus habitantes.

La tasa de seguridad entre 2011 y 2021 ha recaudado aproximadamente 82 millones de dólares, es decir, un promedio de 7 millones de dólares anuales, es decir, que los valores recaudados permiten al GAD del Distrito Metropolitano, como entidad complementaria de seguridad, garantizar la convivencia pacífica de la ciudad.

Sectores establecidos para la Tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos:

La estructura del cobro de la tasa de seguridad se clasifica en área urbana y área rural y a su vez, estas se subdividen en predios destinados a viviendas y a actividades económicas.



Para efectos de la valoración de los bienes inmuebles del área urbana del cantón Quito (en sus componentes fundamentales: terreno y construcción), se divide en nueve sectores económicos.

Los nueve sectores del área urbana consideran los siguientes parámetros y variables:

EN TERRENO.- Los parámetros son:

1. Topología constructiva del sector
2. Obras de infraestructura básica
3. Precio promedio por m2 del sector

Variables:

1. Acabados:
 - Lujo
 - Muy buenos
 - Buenos
 - Económicos
2. Vías
3. Agua
4. Alcantarillado
5. Energía eléctrica
6. Teléfono

EN CONSTRUCCIÓN.- los parámetros son:

1. Tipologías constructivas del predio

Variables:

1. Estructura
2. Acabados
3. Precios unitarios

En esta metodología cada uno de los parámetros considerados dentro del modelo para determinar los AIVAS toma un peso específico.

Con esta información se llega a conformar el plano de precios de mercado como se aprecia en la siguiente imagen, hoy llamada áreas de intervención valorativas (AIVAS).

Por lo tanto, la estructura sectorial en área urbana para la determinación de la tasa de seguridad es la siguiente:

<u>PROXY DE NSE</u>	<u>SECTOR DADO POR CATASTROS</u>	<u>CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR</u>
<u>ALTO - ALTO</u>	<u>S1</u>	<u>ACABADOS DE LUJO, VÍAS, AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>



<u>ALTO - MEDIO</u>	<u>S2</u>	<u>ACABADOS DE LUJO, VÍAS, AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>
<u>ALTO - BAJO</u>	<u>S3</u>	<u>ACABADOS MUY BUENOS, VÍAS, AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>
<u>MEDIO - ALTO</u>	<u>S4</u>	<u>ACABADOS BUENOS , VÍAS, AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>
<u>MEDIO - MEDIO</u>	<u>S5</u>	<u>ACABADOS BUENOS, VÍAS, AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>
<u>MEDIO - BAJO</u>	<u>S6</u>	<u>ACABADOS ECONÓMICOS, VÍAS, AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>
<u>BAJO - ALTO</u>	<u>S7</u>	<u>ACABADOS ECONÓMICOS, AGUA, ESCASO ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>
<u>BAJO - MEDIO</u>	<u>S8</u>	<u>ACABADOS ECONÓMICOS, VÍAS LASTRADAS, AGUA, ESCASO ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>
<u>BAJO - BAJO</u>	<u>S9</u>	<u>ACABADOS ECONÓMICOS, VÍAS LASTRADAS, AGUA EN TANQUERO, ESCASO ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA</u>

En relación al área rural, para el establecimiento de la tasa a cobrar tiene como elementos generadores base, aparte de los establecidos por el AIVAS:

- Extensión territorial
- Dispersión de viviendas
- Servicios recibidos
- Vías de acceso
- Telecomunicaciones
- Transporte
- Distancias entre predios

CÁLCULO DE LA TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS

La tasa de seguridad se calcula de acuerdo a la ubicación física de la propiedad en las áreas urbano y rural, dentro de los nueve sectores económicos en los que se divide el Distrito Metropolitano de Quito.

PRIMERA FASE: ANÁLISIS DE VARIABLES

Para establecer la ecuación de cálculo de la tasa de seguridad convivencia ciudadana y gestión de riesgos se establece varios supuestos. El año 2019 se



establece como año base de todos los datos e indicadores utilizados, ya que es el último año estable. Los datos se obtienen del Banco Central del Ecuador, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.

El VAB es una variable proxy del PIB y se la considera como medida del ingreso o de la actividad económica agregada (Ryan & Plurde, 2009).

El VAB per cápita se utiliza para medir el nivel de riqueza de una persona en el Distrito Metropolitano de Quito; tomando en cuenta que, cierto nivel de riqueza es necesario para adquirir un predio y en consecuencia ser contribuyente de la Tasa de Seguridad, esto debido a que el pago de la misma está atado impuesto predial como mecanismo de cobro.

De igual forma, se considera el Índice de Victimización el cual refleja que 5 de cada 10 quiteños han sido víctimas de un delito; por lo tanto, un mayor índice supondría la necesidad de una mayor logística para mitigar la delincuencia y una mayor coordinación con las entidades del Sistema Integrado de Seguridad.

El Índice de Convivencia Ciudadana refleja las condiciones de empleo, la incidencia de la mortalidad, las tasas de criminalidad, la cantidad de espacio público en proporción al número de habitantes, la movilidad, el acceso en términos de distancia a parques públicos; así como, la percepción del crimen, la sensación de inseguridad, de hacinamiento, el sentido de pertenencia a la ciudad; la facilidad con que se puede acceder a actividades culturales o de ocio. (Páramo, 2019).

El Índice de Participación Ciudadana que captura la intervención individual o colectiva en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, así como, en las instituciones del Estado y la sociedad, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano (CPCCS, 2021).

Fórmula matemática

$$TS = \frac{\left(\frac{VAB_{2019}}{POB_{2019}}\right) * IV * ICC * PC * FEE}{FCPE}$$

Donde,

TS = Tasa de Seguridad anual

VAB = Valor Agregado Bruto de Quito

POB = Población de Quito

IV = Índice de Victimización

ICC = Índice de convivencia ciudadana

PC = Índice de participación ciudadana



FEE = Factor espacial de estratificación
FCPE = Factor de corrección del principio de equivalencia.

Adicionalmente, el modelo contempla un factor espacial de estratificación que permite diferenciar los nueve sectores en los que se han clasificado los contribuyentes de acuerdo al valor del AIVA. Finalmente, se considera, también, un factor de corrección **del histórico estadístico de la recaudación de la tasa**, el cual permite cubrir el costo del servicio.

Una vez construido y validado este análisis, con las simulaciones realizadas, el estudio arroja una estimación por sector y por uso preferente a viviendas, es decir:

Tabla 1 Cálculo de la Tasa de Servicios de Seguridad Ciudadana – Contribuyentes por uso preferente a viviendas

SECTOR	MONTO ESTIMADO A PARTIR DE ECUACIÓN DEL ANÁLISIS
Sector 1	USD 27.04
Sector 2	USD 23.05
Sector 3	USD 19.08
Sector 4	USD 14.99
Sector 5	USD 11.99
Sector 6	USD 9.11
Sector 7	USD 6.01
Sector 8	USD 4.01
Sector 9	USD 2.00

Elaboración: OMSC

Del mismo modo, se lo hace para el uso preferente a actividades comerciales:

Tabla 2 Cálculo de la Tasa de Servicios de Seguridad Ciudadana – Contribuyentes por uso preferente a actividades comerciales

SECTOR	MONTO ESTIMADO A PARTIR DE ECUACIÓN DEL ANÁLISIS
Sector 7,8,9	USD 18.02
Sector 4,5,6	USD 24.06
Sector 1,2,3	USD 30.20

Elaboración: OMSC

Por sus características, en el área rural, los predios destinados a vivienda se equiparán al sector 9 de los predios del área urbana destinados a vivienda; y, los predios destinados a actividades económicas se equiparán al sector 8 del área urbana destinados a vivienda.

SEGUNDA FASE: AJUSTE POR SALARIO BÁSICO UNIFICADO



El carácter dinámico de la sociedad quiteña y de la seguridad ciudadana, requiere montos que se ajusten a esa realidad por lo que se ha atado el valor sectorial estimado en la Primera Fase al **Salario Básico Unificado (SBU) del año del hecho generador**, y como resultado final se obtiene un porcentaje, dicho valor porcentual se aplicará de manera anual al SBU vigente y se convierte en la cuantía a cobrar como tasa.

El Salario Básico Unificado (SBU) es una aproximación del nivel de renta mínimo que tendría un contribuyente que paga la tasa, considerando que el pago de la misma está sujeto a la posesión de un predio. Para la fórmula de cálculo se establece una relación directa entre la Tasa de Seguridad y SBU.

El porcentaje obtenido de dividir la cuantía calculada en la Primera Fase para el SBU, se convierte en parámetro para el cobro de esta tasa, mientras no cambie el SBU. Por ejemplo, en el Sector 1, el valor obtenido fue de \$27.04 y si se lo divide para \$400, el resultado final (convertido a porcentaje) es 6.760%, y así respectivamente con cada sector. Por lo tanto, los porcentajes derivados en los sectores deben permanecer constantes en el tiempo.

Tabla 3 Porcentaje de la Tasa de Servicios de Seguridad Ciudadana – Contribuyentes por uso preferente a viviendas

SECTOR	PORCENTAJE DERIVADO DE AJUSTE POR SBU *SUGERENCIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA
Sector 1	6.760%
Sector 2	5.763%
Sector 3	4.770%
Sector 4	3.748%
Sector 5	2.998%
Sector 6	2.278%
Sector 7	1.503%
Sector 8	1.003%
Sector 9	0.500%

Elaboración: OMSC

Tabla 4 Porcentaje de la Tasa de Servicios de Seguridad Ciudadana – Contribuyentes por uso preferente a actividades comerciales

SECTOR	PORCENTAJE DERIVADO DE AJUSTE POR SBU *SUGERENCIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA
Sector 7,8,9	4.5050%
Sector 4,5,6	6.0150%
Sector 1,2,3	7.5500%



Para el área rural debe considerarse **una tasa de 0.50% sobre el Salario Básico Unificado vigente** en los casos de un predio destinado a vivienda, y para predios destinados a actividades de carácter económico y de servicios, **la tasa es de 1.003% sobre el Salario Básico Unificado vigente**, que tienen relación con el cuadro de sectorización para Contribuyentes por uso preferente a viviendas del área urbana (sector 9 y sector 8, respectivamente).

Además, no estarán sujetos de pago de la tasa las personas con discapacidad o los sustitutos que tengan bajo su responsabilidad y/o dependencia económica a una persona con discapacidad, bajo las mismas condiciones y requisitos.

En el caso que estas personas exentas posean más de un predio, la exención aplicará únicamente al bien inmueble de mayor valor catastral. Respecto de otras propiedades se deberá cumplir con el pago de la tasa establecida por esta ordenanza.

Para estimaciones futuras, a modo de ejemplo, si subiera el SBU a \$450 en los próximos años, el porcentaje del sector 2, que ya se estableció como fijo en el tiempo, arrojaría una cuantía de tasa de $\$450 \times 5.763\%$, es decir, en el sector 1 se pagaría \$25.93. Bajo esa explicación, se procederá con cada uno de los sectores tanto a nivel residencial, comercial, área urbana y rural.

Es importante mencionar que, la guía para la utilización de los recursos provenientes de la tasa de servicios de seguridad ciudadana debe responder al Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos el informe No. XXXXX, expedido por la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación

CONSIDERANDO

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante, "CRE") dispone que son deberes primordiales del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el artículo 53 de la CRE dispone que "[l]as empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación";



Que, el artículo 82 de la CRE señala que “[e]l derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;

Que, el inciso segundo del numeral 3, del artículo 85 de la CRE, establece que “[l]a formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: (...) 3. (...) En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos, y nacionalidades;

Que, el artículo 95 de la CRE consagra el derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participen de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos;

Que, el artículo 158 de la norma referida *ut supra* establece que la Policía Nacional tendrá como su misión fundamental garantizar la protección interna y el mantenimiento del orden público; siendo responsabilidad de las instituciones públicas, nacionales y seccionales apoyarla para el mejor cumplimiento de sus objetivos;

Que, el artículo 226 de la CRE dispone: “[l]as instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la CRE manda: “[l]a administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, la CRE en su artículo 240 determina que los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de sus competencias tendrán facultades legislativas en su circunscripción territorial correspondiente;

Que, el artículo 260 de la CRE dispone que “[e]l ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”;



Que, el artículo 261 de la CRE señala que es competencia exclusiva del Gobierno Central “1. *La defensa nacional, protección interna y orden público (...);*”

Que, el artículo 301 de la norma ibídem señala: “[s]ólo *por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley;*”

Que, el artículo 389 de la CRE señala que es deber del Estado proteger “a *las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mantenimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (...);*”

Que, el artículo 390 de la CRE expresa que: “[l]os *riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;*”

Que, el artículo 393 de la CRE dispone que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno;

Que, el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo dispone que las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo, así mismo acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos;

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (en adelante, “COOTAD”) establece que: “[l]a *autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales,*



bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria (...)".

Que, el artículo 54, letra n) de; COOTAD señala: “[s]on funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes (...): n) *Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana*”;

Que, el artículo 60 letra q) señala: “[l]e corresponde al alcalde o alcaldesa: (...) q) *Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, segu[ri]dad y convivencia ciudadana*;

Que, el artículo 87 letra c) del COOTAD señala que son atribuciones del Concejo Metropolitano “c) *Crear, modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute*”;

Que, el artículo 140 del COOTAD faculta a los gobiernos autónomos descentralizados (en adelante GADs) municipales a gestionar las acciones necesarias en materia de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia de riesgos de origen natural y antrópico, acorde a la normativa vigente. De igual forma señala que, los GADs municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger a las personas, colectividades y la naturaleza en sus procesos de ordenamiento territorial;

Que, el artículo 166 del COOTAD establece que “(...) *Las tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o específicas, establecidas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados ingresarán necesariamente a su presupuesto o cuando corresponda, al de sus empresas o al de otras entidades de derecho público, creadas según el modelo de gestión definido por sus autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé a estos recursos de conformidad con la ley*”.

Que, el artículo 172 del COOTAD, indica que son ingresos propios de la gestión, “*los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. Las tasas que por un*



concepto determinado creen los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los respectivos territorios (...)”;

Que, el artículo 218 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (en adelante, COESCOP) *“Las entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y municipales, son organismos con potestad pública en su respectivo ámbito de competencia, que desarrollan operaciones relacionadas con el control del espacio público; prevención, detección, disuasión e investigación de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención prehospitalaria y respuesta ante desastres y emergencias; con la finalidad de realizar una adecuada gestión de riesgos y promover una cultura de paz, colaborando al mantenimiento de la seguridad integral de la sociedad y del Estado.*

Las entidades que regula este libro son de carácter operativo, civil, jerarquizado, disciplinado, técnico, especializado y uniformado. Estas entidades realizan una labor complementaria a la seguridad integral que brinda el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su gestión debe articularse a las políticas del Plan Nacional de Seguridad Integral”;

Que, el artículo 219 del COESCOP establece que *“[l]as máximas autoridades de las entidades complementarias de seguridad y cada uno de sus entes rectores, tienen la obligación de coordinar y ejecutar acciones conjuntas encaminadas a complementar y reforzar el trabajo de vigilancia, control y prevención que realizan. En el cumplimiento de su gestión, se articularán con la política pública a cargo del ministerio rector del orden público, protección interna y seguridad ciudadana”;*

Que, el artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que es *“deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales”;*

Que, la letra d) del artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina en el principio de proporcionalidad, que *“las acciones de seguridad y asignación de recursos serán proporcionales a las necesidades de prevención y protección, y a la magnitud y trascendencia de los factores que atenten contra la seguridad de los habitantes del Estado”;*



Que, el literal f) del artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina en el principio de responsabilidad que *“las entidades públicas tienen la obligación de facilitar coordinadamente los medios humanos, materiales, y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la presente ley. La responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique su misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas”*;

Que, el artículo 10 letra l) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que es función del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, *“l. coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil para lograr una articulación integral de la defensa nacional, el orden público y la seguridad ciudadana, en los términos establecidos en la presente ley (...)”*;

Que, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su letra c) determina que la prevención y protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las entidades del Estado y que el Ministerio de Gobierno coordinará acciones con los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias;

Que, el artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, define a la seguridad ciudadana, como una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador;

Que, el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, expedido mediante Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019, en el capítulo VII, regula la Tasa por los Servicios de Seguridad Ciudadana;

Que, mediante sentencia de la Corte Constitucional No. 70-11-IN/21 de 22 de septiembre de 2021, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 1540 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito con efecto diferido y por conexidad de los artículos 1541, 1542, 1543 y 1544 del mismo cuerpo normativo;

Que, la Corte Constitucional en la sentencia No. 70-11-IN/21 de 22 de septiembre de 2021, ordenó al GAD Municipal del Distrito Metropolitano de Quito que, *“en caso de que emita normativa que sustituya las normas declaradas inconstitucionales, se plasmen los elementos esenciales de la tasa por servicios de seguridad ciudadana, guardando estricta observancia de los parámetros establecidos en esta sentencia, esto es: 3.1. Que la tasa fijada por servicios de seguridad ciudadana establezca un accionar estatal determinado; 3.2. Que la tarifa que se establezca por los servicios de seguridad ciudadana, responda a los costos en los que incurre el GAD para la prestación del servicio vinculado a*



la tasa, de tal forma que se respeten el principio de provocation y recuperacion de costos y el principio de equivalencia; y, 3.3. Que se establezcan mecanismos de medicion de satisfaccion del servicio prestado”;

Que, el informe de la **Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad** contenido en el **Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-2021-3102-OF, de fecha 29 de noviembre de 2021** establece la necesidad de contar con una tasa para atender los requerimientos de la ciudad.

Que, se requiere la sustitución de las normas declaradas inconstitucionales y se reforme el Código Municipal en lo que respecta a la regulación de la tasa de seguridad ciudadana con la finalidad de que la misma esté determinada dentro del accionar estatal en materia de seguridad ciudadana y gestión de riesgos;

Que, es necesario garantizar la prestación del servicio a través de la recaudación de la mentada tasa con base a los principios de aplicación tributaria: progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria;

En ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 7 y 87 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

EXPIDE

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL CAPITULO VII, TÍTULO IV, LIBRO III.5 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Artículo. 1.- Sustitúyase el Capítulo VII, del Título IV, del Libro III.5 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, por el siguiente:

“CAPÍTULO VII

DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS

Artículo (...) 1.- Objeto.- Se crea la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos del Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo (...) 2.- Hecho Generador.- En función de la implementación del Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, el hecho generador de la tasa comprende:



- a) La prestación de servicios de prevención situacional, comunitaria y gestión de riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito.
- b) El apoyo material y técnico a las entidades nacionales de seguridad y de justicia respecto de su labor en la ciudad;

Artículo (...) 3.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos, es el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo (...) 4.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos, todas las personas naturales, sociedades y personas jurídicas públicas o privadas, que, al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de tributación, la ley los repute propietarios de predios urbanos o rurales, en la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito.

Para efectos de este capítulo, el término sociedad, comprenderá el previsto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sin la exclusión de aquellos entes constituidos por entidades públicas.

Artículo (...) 5.- Liquidación y pago del tributo.- La tasa será liquidada por año anticipado y pagada de forma anual, como tributo adicional del impuesto predial, conforme el presente Código, con base en todas las modificaciones operadas en el catastro inmobiliario oficial hasta el 31 de diciembre de cada año.

La tasa deberá pagarse en el curso del respectivo año, sin necesidad de que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito notifique esta obligación, dado que la misma deberá constar en la misma orden de pago del impuesto predial correspondiente.

El tributo será exigible a partir del 01 de enero del año siguiente al de la tributación, en los mismos términos de exigibilidad del impuesto predial.

Artículo (...) 6.- Valores.- La tasa se pagará de acuerdo a los rangos de categorización y conforme al salario básico unificado del trabajador en general (SBU) del año del hecho generador, acorde a la siguiente tabla:

- a. Predios destinados preferentemente a vivienda:

SECTOR	TASA ANUAL
Sector 1	6.760% SBU



Sector 2	5.763% SBU
Sector 3	4.770% SBU
Sector 4	3.748% SBU
Sector 5	2.998% SBU
Sector 6	2.278% SBU
Sector 7	1.503% SBU
Sector 8	1.003% SBU
Sector 9	0.500% SBU

b. Predios destinados a actividades preferentemente económicas y de servicios:

SECTOR	TASA ANUAL
Sector 7,8,9	4.5050% SBU
Sector 4,5,6	6.0150% SBU
Sector 1,2,3	7.5500% SBU

Los predios identificados en el catastro oficial a la fecha del acaecimiento del hecho generador, como rurales, en los casos de uso preferente de vivienda, tributarán conforme al sector 9 de la tabla descrita en la letra a) de este artículo; y, en los casos de uso preferente de actividad económica, se aplicará la tasa prevista para el sector 8 de la letra a) de este artículo.



Artículo (...) 7.- Exención.- Estarán exentos del pago de la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos, los adultos mayores que reúnan las condiciones fijadas en el artículo 14 de la Ley del Adulto Mayor, y las personas con discapacidad propietarios de bienes inmuebles ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito.

Así mismo estarán exentos del pago de la tasa, las personas con discapacidad o los sustitutos que tengan bajo su responsabilidad y/o dependencia económica a una persona con discapacidad, bajo las mismas condiciones y requisitos.

En el caso que estas personas exentas posean más de un bien inmueble, la exención aplicará únicamente al predio de mayor valor catastral. Respecto de otras propiedades se deberá cumplir con el pago de la tasa establecida por esta ordenanza.

Artículo (...) 8.- Régimen de propiedad horizontal.- Para el cobro de la tasa por servicios de seguridad ciudadana a los propietarios de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, se tomará en cuenta únicamente la unidad principal y no las complementarias, tales como parqueaderos, bodegas, secaderos, lavanderías, jardines, patios, balcones o terrazas.

Artículo (...) 9.- Administración y destino de los valores recaudados.- La tasa será administrada a través de una cuenta especial bajo la responsabilidad de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGURIDAD, entidad que actuará bajo las políticas y lineamientos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo (...) 10.- Sistema de Medición de la Tasa de Seguridad y convivencia ciudadana del DMQ. - La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad en coordinación con EP EMSEGURIDAD, son los entes técnicos encargados para realizar el seguimiento y evaluación de la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos, este sistema estará establecido de la siguiente manera:

- Seguimiento y monitoreo: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad y EP EMSEGURIDAD a través del de apoyo técnico y metodológico del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana realizará este monitoreo de manera semestral y anual. Este proceso se compone de:
 - o Informes de seguridad y convivencia ciudadana,
 - o Levantamiento semestral y anual de encuesta de victimización y percepción de inseguridad,
 - o Seguimiento de proyectos relacionados con Plan de Seguridad y Convivencia Pacífica 2021 – 2025,



- Entrevistas a líderes barriales y comunitarios para conocer el impacto de las inversiones derivadas de la alineación al Plan de Seguridad y Convivencia Pacífica 2021 – 2025.
- Evaluación de satisfacción e impacto de la tasa de servicios de seguridad ciudadana
- Adicionalmente se consideran índices que se relacionan con el hecho generador, y tendrán como año base el 2019:
- De Prevención Situacional, Comunitaria y gestión de Riesgos en el DMQ:
 - Índice de Convivencia Ciudadana, medido a través de los incidentes reportados por el Sistema Integrado de Seguridad ECU – 911,
 - Índice de Gestión de Riesgos, medido por emergencias atendidas y reportadas al Centro de Operaciones de Emergencias del DMQ - COE
- Apoyo material y técnico a las entidades nacionales de seguridad y de justicia:
 - Índice de Apoyo material y técnico a las entidades nacionales de seguridad y de justicia, medido por inversión en Infraestructura y logística entregada a entidades de seguridad y justicia
- Implementación del Plan de Seguridad y Convivencia Pacífica del DMQ
 - Índice de Violencias, número de incidentes reportados al SIS ECU – 911:
 - Robos
 - Violencia Sexual
 - Violencia Intrafamiliar

El informe de los resultados respecto de la satisfacción ciudadana obtenida de tasa se pondrá en conocimiento del Concejo Metropolitano y se publicará en los medios de difusión de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, y EP EMSEGURIDAD.

DISPOSICIÓN GENERAL

UNO.- La Dirección Metropolitana de Catastro será la encargada de la carga inicial, alimentación y administración de la información de sectorización bajo el nuevo esquema, en el sistema catastral municipal (SIREC – Q) para efectos del cálculo de tasa, con base en las directrices que para el efecto le otorgue EP EMSEGURIDAD.

DOS .- Encárguese a la Comisión de Codificación Legislativa, la codificación del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con la Disposición General Décimo Sexta del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA



UNICA. - Únicamente para el ejercicio 2022 la determinación y emisión de la tasa se registrará por la carga de registros vigentes en el catastro oficial a 31 de diciembre de 2021 de sectorización de predios que realice la Dirección Metropolitana de Catastro. En los ejercicios fiscales subsiguientes se estará a lo dispuesto en el artículo (...) 7 y Disposición General de esta ordenanza, para lo cual, la EP EMSEGURIDAD deberá realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección Metropolitana de Catastro para la definición y actualización técnica de la sectorización que define la base imponible del tributo.

DISPOSICIÓN FINAL

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del Código Orgánico Tributario, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.